

JUAN JOSÉ NATERA RIVAS

Departamento de Geografía, Universidad de Málaga

Caracterización de la pobreza según el nivel de renta en el noroeste argentino

RESUMEN

A partir de la explotación de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada en 2001, este trabajo estudia las características residenciales y de grado de instrucción relativas a la población urbana, residente en la región noroeste de Argentina, situada por debajo del umbral de pobreza, definida ésta por el nivel del renta o ingresos. Así mismo, se relaciona el nivel de instrucción con el mercado de trabajo.

RÉSUMÉ

Caractérisation de la pauvreté selon le niveau des revenus dans le Nord-Ouest de l'Argentine.- À partir de l'exploitation de l'Enquête des Conditions de Vie réalisée en 2001, ce travail expose les caractéristiques résidentielles et de niveau d'instruction relatives à la population urbaine résidant dans la région Nord-Ouest de l'Argentine qui peut être située au dessous du seuil de pauvreté, en définissant celle-ci par le niveau des revenus. Également, on met en relation le niveau d'instruction avec le marché du travail.

ABSTRACT

A characterization of poverty according to income level in the Argentinean Northwestern region.- Using data from the Life Conditions Survey carried out in 2001, this paper outlines the housing and educational characteristics of the urban population living in the Argentina Northwestern region which could be situated under poverty threshold according to the income level. We also relate the last characteristic with labour market.

Palabras clave / Mots clé / Key words

Pobreza, nivel de renta, nivel de instrucción, mercado de trabajo, Noroeste argentino.

Pauvreté, niveau des revenus, niveau d'instruction, marché du travail, Nord-Ouest de l'Argentine.

Poverty, income level, educational level, labour market, Northwestern Argentina.

I INTRODUCCIÓN

EL PRESENTE estudio aborda la caracterización de la población situada por debajo del umbral de pobreza de la región Noroeste de la República Argentina, residente en localidades de 5.000 habitantes o más, centrandó el análisis en tres aspectos sustantivos: alojamiento, nivel de instrucción y relaciones entre éste y el mercado de trabajo. Se trata de una cuestión de interés, dado que en el cambio de siglo la región atraviesa uno de sus peo-

res momentos desde el punto de vista de su situación social; en este sentido, resulta de gran importancia la posibilidad que nos aporta la información procedente de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de abordar el estudio de la población con ingresos insuficientes de la región, complementando de esta forma todo un conjunto de estudios anteriores, realizados a nivel provincial, entre los cuales merecen destacarse los publicados por el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) y especialmente la serie de los Diagnósticos Sociales provinciales (empleando

información del Censo de 1991, del SISFAM, de diferentes ministerios, etc), así como la serie de Informes sobre la Situación Social 1998-2002 de las diferentes provincias, meramente descriptivos pero ricos en información estadística actualizada.

Como acabamos de indicar, la principal fuente empleada para la realización de nuestro estudio ha sido la segunda onda de la denominada Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), de ámbito nacional, realizada en 2001. El tamaño muestral fue de alrededor de 26.000 viviendas, situadas en localidades de 5.000 habitantes o más, en las cuales reside el 96% de la población urbana de la República y el 84% de la población total; para la región del Noroeste los porcentajes son del 93,77% y del 72,8%, respectivamente. El dominio de análisis del marco muestral a nivel regional considera al Noroeste como compuesto por las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Sin embargo, y pese a la existencia de un dominio de análisis provincial, tan sólo Jujuy, Salta y Santiago del Estero contaban con suficientes unidades primarias de muestreo seleccionadas para el diseño de la muestra, y, por tanto, con información a este nivel. Este hecho imposibilita un estudio a escala provincial que abarque la totalidad de las jurisdicciones que forman la región. La diferenciación entre pobres y no pobres en la encuesta viene dada por el empleo de una línea de pobreza. Como es sabido, la medición de la pobreza por este método consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. La condición de pobre de los hogares y, por consiguiente, de las personas que los integran, fue definida por la encuesta a partir de la comparación de los ingresos de los hogares con la línea de pobreza correspondiente a la región a la que pertenecen, calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (en adelante INDEC). Para el caso del Noroeste, su valor en septiembre de 2001 para el adulto equivalente se cifraba en 129,95 pesos, al cambio actual menos de 45 euros. Por último, es preciso señalar que hay variables cuyo tratamiento debe ser realizado con precaución, debido a los elevados coeficientes de variación que presentan; por ello, la profundización en el estudio de determinadas líneas temáticas no puede realizarse de forma tan amplia como el cuestionario de la encuesta da a entender.

Pese a ello, las ventajas del empleo de esta encuesta, frente a otros instrumentos susceptibles de ser utilizados

para caracterizar a los pobres, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), son múltiples. A modo de ejemplo, puede citarse el hecho de que abarca una mayor proporción de población, dado que, como hemos indicado, incluye a los residentes en las localidades de 5.000 habitantes o más, no restringiéndose únicamente a los principales aglomerados urbanos del país, como ocurre con la EPH; asimismo, la ECV aporta información referente no sólo a las características básicas del alojamiento, del grado de instrucción, etc de la población pobre y no pobre, sino que también nos informa sobre el acceso a infraestructuras básicas, a servicios sociales de diverso tipo..., todo ello en función de los ingresos de los hogares y de la población que los compone, lo cual enriquece considerablemente el análisis que puede realizarse.

El estudio se articula de la siguiente manera: en primer lugar ofrecemos una caracterización sucinta de aspectos básicos de la región Noroeste, con el fin de aportar al lector el contexto en el que debe insertarse la explotación de la encuesta. Esta explotación constituye el núcleo del estudio, que ha sido dividido en cuatro apartados. En el primero de ellos, de corte fundamentalmente descriptivo, abordamos la cuantificación de los pobres, tanto los hogares como las personas, en el que, además de la cuantificación, prestamos atención a la incidencia del fenómeno según el sexo, los grupos de edad, etc. Los tres apartados restantes están dedicados a la caracterización de la población pobre, y a la contextualización de los hallazgos, en función de cada uno de los aspectos sustantivos a los que al comienzo hacíamos referencia: vivienda, nivel de instrucción y, por último, relaciones entre éste y el mercado de trabajo.

II CARACTERIZACIÓN REGIONAL

La región Noroeste de la República Argentina está formada por las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; limita al norte con Paraguay y Bolivia, y al oeste con Chile, mientras que los límites oriental y meridional son nacionales: provincias de San Juan, San Luis y Córdoba al sur, Formosa, Chaco y Santa Fe al este. Su extensión es de 559.864 km² (que corresponden al 20,14% del total de Argentina, excluidos los territorios antárticos y las islas del Atlántico Sur) y en ella residen, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, 4.457.398 habitantes, el 12,3% del total nacional; este porcentaje re-

presenta el último escalón, hasta el momento, de un proceso de incremento del peso de la población regional en el total nacional que se inició en 1970, cuando representaba el 11% de la misma¹. Este incremento de la población regional (que se sitúa por encima del correspondiente al promedio nacional) es extrapolable a todas las provincias del Noroeste argentino, aunque, ciertamente, hay diferencias entre ellas en función de su intensidad: entre 1991 y 2001 Catamarca y Salta aumentaron su población en más de un 24%, y La Rioja por encima del 30%, mientras que Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán lo hicieron en una proporción más moderada, entre un 17% y un 20%.

Pese al paulatino incremento de su población urbana, el Noroeste es todavía una región con un nivel de urbanización considerablemente más bajo que el del conjunto nacional. Su porcentaje de población rural (entendiendo por tal la que reside en localidades de menos de 2.000 habitantes) era en 2001 del 21,71%, el doble que el correspondiente al total de la República (10,69%). Además, tomada en su conjunto la región presenta unos valores de densidad muy bajos en comparación con el país (7,9 hab./km² y 13,04 hab./km² respectivamente) aunque ciertamente las diferencias por provincias son muy marcadas: Tucumán, la provincia con mayor densidad, presenta un valor de 59,3 hab./km², en fuerte contraste con los 3,2 hab./km² de La Rioja o los 3,3 hab./km² de Catamarca.

En relación con los aspectos dinámicos de la población, la totalidad de las provincias que componen la región aún presentan tasas de natalidad más elevadas que el conjunto nacional, situada en 2001 en un 18,2‰; las correspondientes a las provincias del Noroeste oscilan entre el 20,5‰ de La Rioja y el 24,9‰ de Catamarca. En lo tocante a la mortalidad, la tasa nacional (7,6‰ en 2001) es más elevada que la de cualquiera de las 6 provincias de la región, entre las cuales Salta tiene la más baja (5,2‰) y Tucumán la más elevada (6,3‰). Estas tasas de mortalidad comparativamente bajas son más una consecuencia de la juventud de la población, a la que inmediatamente haremos referencia, que reflejo de unas condiciones sanitarias adecuadas. En este sentido, es representativo el hecho de que las tasas de mortalidad infantil sobre nacidos vivos fueran en ese mismo año más elevadas en cuatro de las seis provincias del Noro-

este, y que tan sólo en Catamarca y en Santiago del Estero esta variable esté ligeramente por debajo del valor nacional (16,3‰); y en la misma dirección apuntan las menores esperanzas de vida de las poblaciones provinciales. Si la del conjunto de la república se situaba en 2001 en 71,93 años, tan sólo la tucumana se acercaba a ella (71,01), quedando el resto a mayor distancia, especialmente Jujuy y Salta, donde no se alcanzaban siquiera los 69 años de esperanza de vida.

En cuanto a la estructura por sexo de la población, el índice de masculinidad del Noroeste (98,33) es ligeramente más elevado que el correspondiente al total de país (95,21), hecho este que suele caracterizar a zonas con importantes componentes rurales. Como en el párrafo anterior indicamos, su estructura por edad es joven, tal y como se aprecia en la distribución de la población en grandes grupos de edad; el grupo de niños y jóvenes supone más de un tercio de la población total (el 34,12%), mientras que los ancianos representan un exiguo 6,75%, frente al 28,26% y el 9,89% correspondientes al total de la población argentina. El escaso porcentaje de población mayor de 64 años, común a las provincias de la región, ha sido atribuido, de forma hipotética, a las emigraciones por razones laborales que se registraron en las décadas del 60 y del 70, que implicaron el desplazamiento de población entonces en edad activa hacia centros urbanos de mediano y gran tamaño, así como también a la comparativamente baja esperanza de vida (SIEMPRO; 2001, pág. 21). De cualquier forma, como consecuencia de esta estructura por edad, el índice de dependencia potencial tiene un valor elevado, 0,69, frente al nacional, que es tan sólo de 0,62; este valor, comparativamente alto, se deriva fundamentalmente del importante peso que los niños tienen aún en el conjunto de la población del Noroeste.

Desde el punto de vista social, la región se encuentra en una situación claramente desfavorecida respecto al conjunto de la nación. Así, y según los datos del Censo de 2001, en las seis provincias que la componen existía un total de 240.080 hogares con algún tipo de Necesidad Básica Insatisfecha, esto es, el 23,58% del total de hogares, en los que residían 1.212.633 personas que suponían el 27,35% de los habitantes censados en la región; estos porcentajes son muy superiores a los correspondientes al total nacional, que se sitúan en el 14,3% el correspondiente a los hogares, y en el 17,7% el de las personas. Indicadores indirectos de esta situación social comparativamente deficiente son también la tasa bruta de mortalidad infantil, superior, como anteriormente señalamos, en la mayor parte de las provincias a la corres-

¹ Esta cuestión, así como otras relativas a la evolución de la mortalidad, la fecundidad, la composición profesional de la población, y las migraciones, etc. pueden ser encontradas con mayor desarrollo en BOLSI (1997).

pondiente al total nacional, o el volumen de analfabetos mayores de 10 años, un 4,32%, muy superior a la del total nacional situado en el 2,60%.

En lo tocante al perfil productivo de la región, las actividades más importantes, no sólo en cuanto a la productividad, sino también en lo relacionado a la capacidad para insertar la producción en el mercado internacional, son las relacionadas con la obtención de hidrocarburos, minerales y productos agropecuarios. Sin embargo, el volumen de producto geográfico bruto (PGB) generado es muy escaso. En un contexto nacional de gran concentración territorial del mismo (5 jurisdicciones concentran el 80%), en 2000 tan sólo Tucumán podría considerarse como una provincia de dimensión económica mediana, con un PGB inferior a los 5.000 millones de pesos de 1993, colocándose Salta a escasa distancia de ella, mientras que el PGB de las cuatro provincias restantes no alcanzaba en ese año los 2.200 millones de pesos (GATTO y CETRÁNGOLO; 2003, pág. 14).

Y según estos mismos autores (*Ibid.*, págs. 54-55), el perfil productivo de dos de las provincias del Noroeste, La Rioja y Santiago del Estero, las sitúa entre las de mayor atraso productivo del país, en tanto que Jujuy afronta limitaciones productivas severas y Salta y Tucumán podrían calificarse como de desarrollo intermedio agroalimentario. Caso especial es Catamarca, provincia muy rezagada desde el punto de vista productivo, pero que ha visto mejorar sus cifras a nivel macro con las inversiones del proyecto minero de La Alumbra, superiores a los 1.000 millones de dólares.

III CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN CON INGRESOS INSUFICIENTES EN EL NOROESTE ARGENTINO

En primer lugar es necesario indicar cuál es el volumen de población por debajo de la línea de pobreza en el conjunto del Noroeste; según la ECV son 280.016 hogares sobre un total de 688.963, esto es, el 40,64% del total de hogares que indicaron el monto de sus ingresos. Esta apreciación es importante, pues el número de hogares que puede ser clasificado a este respecto es ligeramente inferior al total de hogares existentes en el Noroeste (688.963 frente a 755.272, respectivamente), diferencia que viene explicada por el hecho de que 66.309 hogares no declararon su monto de ingresos. En cuanto a la población, la relación entre pobres y no pobres es aún más desfavorable, puesto que los primeros

(1.486.266 individuos) suponen el 50,31% sobre el total de personas que declararon ingresos (2.954.044); y al igual que ocurre con los hogares, 305.467 personas (el 9,37% del total de la población no declaró sus ingresos). En la presentación de la región indicábamos que su situación social era peor que la correspondiente al conjunto nacional en lo tocante a la pobreza estructural, medida a través de NBI, situación ésta que tiene su correlato en la pobreza según ingresos: frente a las cifras anteriores, que ilustran la situación del Noroeste, el porcentaje de hogares pobres según los ingresos sobre el total nacional de hogares era del 30,87%, cifra que asciende al 39,98% si lo que se considera es la población. La incidencia de este tipo de pobreza en el Noroeste es, consecuentemente, un tercio superior a la nacional si la unidad de análisis son los hogares, y está una cuarta parte por encima si consideramos la población.

La distribución por sexo del volumen de población con ingresos insuficientes es equitativa, 49,12% son varones y 50,88% mujeres, al tiempo que la incidencia de la pobreza en el conjunto de los varones y de las mujeres es también muy similar: el 51,32% de los varones son pobres, al igual que el 49,34% de las mujeres. En contraste, la distribución de la pobreza en grupos de edad difiere considerablemente de la correspondiente al total de la población. Si los niños y jóvenes suponían el 34,12% del total de la población, aportan el 40,73% a la población pobre, mientras que, frente a esta situación de sobrerrepresentación, se registra la contraria en el grupo de ancianos, que aportan a la población pobre tan sólo un 2,96%, frente al peso del 6,75% que tienen sobre el total de la población regional. El grupo de edad restante, los adultos, también se caracteriza por una sobrerrepresentación en la población pobre, a la que aporta el 59,13% de los efectivos, frente al 56,31% que suponen sobre el total de población de la región del Noroeste argentino.

Al considerar la incidencia de la pobreza en el interior de cada uno de los grupos de edad, resulta especialmente grave el hecho de que el 61% de la población de entre 0 y 14 años haya sido clasificada como pobre, y que aún el 46% de los adultos esté también en dicha condición. Son los ancianos el grupo en el que la incidencia de la pobreza es menor, pues tan sólo el 24,46% de los integrantes de este grupo de edad fueron considerados pobres. La incidencia de la pobreza en los diferentes grupos de edad es sistemáticamente superior en el Noroeste que en el conjunto de la nación (es pobre el 53,4% de los niños, el 36,68% de los adultos y el 19,5% de los ancianos), lo cual no viene sino a confirmar la

CUADRO I. Incidencia de la pobreza por tipo de hogar (porcentajes horizontales)

Tipo de hogar	Total hogares	Pobres	No pobres
Total	100,00	40,64	59,36
Hogar unipersonal	100,00	18,86*	81,14
Familia nuclear completa	100,00	40,87	59,13
Familia nuclear monoparental	100,00	44,76	55,24
Familia ampliada completa	100,00	50,03	49,97
Familia ampliada monoparental	100,00	56,71	43,29
Otro tipo hogar multipersonal	100,00	30,76*	69,24

* Coeficiente de variación superior al 15% y hasta del 20%
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2001.

comparativamente mala situación social que caracteriza a la región y a la que anteriormente hicimos referencia.

Por otro lado, la pobreza no azota a todos los tipos de familia con la misma virulencia. Los porcentajes horizontales (cuadro I) muestran cómo es comparativamente muy escasa en los hogares unipersonales, mientras que más de la mitad de las familias ampliadas², ya sean completas o monoparentales, han sido calificadas por la encuesta como pobres. Ciertamente, estos tipos de familias no nucleares han sido calificados como propios de las situaciones de pobreza (ARRAIGADA; 2000, pág. 24), en la que juega un papel muy importante la disponibilidad (más bien la falta de ella), de una vivienda por cada familia (sean unipersonales o multipersonales): esta tipología tiene en cuenta tanto el número de personas que comparten el hogar como, en el caso de familias multipersonales, su relación con el jefe de hogar o cabeza de familia, clasificando el tipo de familia en función de ésta última variable. Este hecho tiene, en lo que a nosotros nos interesa, al menos dos vertientes. Por un lado, la disponibilidad relativa de vivienda existente en el mercado inmobiliario, ya sea legal o ilegal (en el sentido de estar al alcance de la compra, alquiler, o aún usurpación del terreno para levantarla), incide directamente sobre el volumen de este tipo de familia extensa: a mayor disponibilidad de vivienda, menor incidencia de las fa-

milias ampliadas. Y por otro lado, en relación con lo anterior, la capacidad adquisitiva diferenciada entre pobres y no pobres lleva indudablemente a una mayor presencia de los primeros en la nómina de las familias ampliadas, pues tienen mayores dificultades para alcanzar la relación de una familia por vivienda.

Los porcentajes verticales (cuadro II) apuntan en esa misma dirección. Así, si bien las familias pobres y no pobres están compuestas en gran medida por familias nucleares completas (prácticamente un 47% en ambos grupos), la presencia de familias unipersonales es muy escasa entre los pobres, al tiempo que las familias ampliadas, ya sean completas o monoparentales, son el 30% de las pobres, no llegando al 19% entre las no pobres. Como acabamos de indicar, la mayor incapacidad para obtener una vivienda por parte de la población de menores ingresos tiene su reflejo en la composición de las familias pobres, tanto en lo relativo a la escasez de familias unipersonales, como en la importancia de las ampliadas. Sobre esta cuestión volveremos en el epígrafe siguiente.

IV LA VIVIENDA

La pobreza por insuficiencia de ingresos influye en gran medida sobre el tipo de asentamiento en el que la población afectada puede residir, por lo que no debe extrañar que, en el Noroeste, la mayor parte de los hogares localizados en villas de emergencia o asentamientos sean pobres; el coeficiente de variación superior al 15% de esta variable aconseja tomar con muchas precauciones las cifras, pero podría indicarse, de manera orientativa, que alrededor de las cuatro quintas partes de los ho-

² Son aquellas familias compuestas por la familia nuclear junto a otros miembros, parientes o no parientes. Se entiende por familia nuclear a la formada por pareja, pareja con hijos solteros, o madre o padre con hijos solteros. Se cataloga a la familia nuclear como monoparental si está formada por madre o padre, con hijos solteros, y como completa si la compone una pareja o pareja con hijos solteros. Por su parte, la categoría «hogares multipersonales de otro tipo» engloba a aquellos en los que no está presente el núcleo conyugal del cabeza o jefe de familia, esto es, están conformados por la persona principal más otros miembros, parientes o no parientes no nucleares.

CUADRO II. *Incidencia de la pobreza por tipo de hogar (porcentajes verticales)*

Tipo de hogar	Total hogares	Pobres	No pobres
Total	100,0	100,0	100,0
Hogar unipersonal	10,5	4,9*	14,4
Familia nuclear completa	47,1	47,3	46,9
Familia nuclear monoparental	10,3	11,4	9,6
Familia ampliada completa	16,0	19,7	13,5
Familia ampliada monoparental	7,1	9,9	5,2
Otro tipo hogar multipersonal	9,0	6,8*	10,5

* Coeficiente de variación superior al 15% y hasta del 20%
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2001.

gares situados en villas o asentamientos estaban situadas por debajo de la línea de pobreza. No obstante, y dado el comparativamente escaso número de hogares localizados en este tipo de hábitat (serían menos de 20.000, frente a los prácticamente 689.000 totales), en realidad la inmensa mayoría de los hogares pobres, concretamente el 94,2%, reside en viviendas localizadas en barrios con trazado urbano. En este hecho influyen varias situaciones, entre las cuales puede mencionarse el trabajo que se ha realizado para la conversión de antiguas villas de emergencia en barrios que comparten gran parte de las características del resto de la ciudad, y que implican una regularización de la propiedad y reajustes en el trazado del viario, etc, todo ello encauzado a través de planes de ámbito nacional o provincial. En este sentido, es interesante indicar que en el contexto de un importante aumento de programas sociales que se experimentó en Argentina a mediados de la década de los noventa (eran 48 en 1996, y 70 en 1999), se asistió a un paralelo incremento del número de los correspondientes a la vivienda (ACUÑA, KESSLER y REPETTO; 2002, pág. 27), aunque en el marco de una drástica disminución de los fondos destinados a vivienda y urbanismo. Cuando los procesos de regularización de una villa culminan, y deja de ser considerada como tal, la población beneficiada deja de residir formalmente en una villa de emergencia, pero su situación económica no ha tenido por qué mejorar, de forma que continúa por debajo del umbral de pobreza. De cualquier forma, es probable que en el porcentaje abrumadoramente mayoritario de hogares pobres residiendo en barrios con trazado urbano haya tenido más que ver el fuerte proceso de empobrecimiento que la población del conjunto de la región ha experimentado, y que ha hecho que hogares residentes fuera de las villas, que hasta el momento no eran pobres, hayan pasado a engro-

sar la cuenta de población con ingresos insuficientes, como reflejo del deterioro de sus condiciones monetarias; a esta última cuestión apunta el hecho de que, según indica la ECV, el porcentaje de hogares pobres fuera de villas o asentamientos fuera mayor en el Noroeste que en el conjunto del país (94,2% frente a 92,6%, respectivamente), al tiempo que entre octubre de 1998 y octubre de 2001 el porcentaje de hogares pobres subiese del 33,5% al 38,2%, para dispararse al 59,2% un año después (SIEMPRO; 2002, pág. 16).

La irregularidad o informalidad urbana se manifiesta en dos aspectos; el primero se refiere al proceso de urbanización en el sentido en el que se incumplen las normas de construcción de la ciudad, y está reflejado en la ECV únicamente en el monto de hogares residentes en una villa o asentamiento, y al que acabamos de hacer referencia (la informalidad de los sectores de población medios y altos, que en algunos textos viene referida como ilegalidad, para diferenciarla de la correspondiente a los sectores pobres, no es observable a partir de la encuesta). El segundo aspecto se refiere a la inexistencia de títulos de propiedad o, en su caso, de contratos de alquiler, que en la región del Noroeste afecta a una proporción sensiblemente superior de hogares, como inmediatamente vamos a comprobar.

Si bien es cierto que son abrumadora mayoría los hogares pobres que residen fuera de una villa, también lo es el que, sin embargo, sólo el 56,8% de los mismos son propietarios de la vivienda y el terreno en que ésta se asienta, porcentaje que se torna escaso al compararlo con el correspondiente a los no pobres, que asciende al 69,5%. También escaso resulta el porcentaje de hogares pobres que alquilan, el 7,7% (frente al 11,3% de los no pobres), aunque esta situación es fácilmente compres-

CUADRO III. Carencias infraestructurales y de servicios (porcentajes)

	Total hogares	Pobres	No pobres
<i>Carencia de infraestructura en la cuadra</i>			
Sin cloacas	31,9	42,8	24,5
Sin gas natural	41,2	58,0	29,8
Sin agua corriente en el interior de la vivienda	1,4	2,9	0,3
Sin alumbrado público	8,3	12,8	5,2
<i>Acceso inadecuado a servicios básicos</i>			
Banco a 10 cuadras o más	63,8	75,7	55,7
Farmacia a 10 cuadras o más	24,2	33,9	17,6
Transporte público a 5 cuadras o más	12,6	16,1	10,2
Escuela primaria pública a 5 cuadras o más	27,8	33,3	24,0
Centro de salud a 5 cuadras o más	44,4	42,5	45,7
Teléfono público a 5 cuadras o más	18,9	26,8	13,6
Sin recolección diaria de basura	10,1	15,7	6,3
<i>Medio ambiente urbano degradado</i>			
Proximidad a área inundable	32,7	41,5	26,8
Proximidad a basural	33,3	38,4	29,8

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2001.

ble debido a los menores recursos monetarios, por lo que la opción del alquiler no lo es tal para una fracción de los mismos. A esta dificultad para alquilar como alternativa a la propiedad de la vivienda (y mantenerse, por tanto, dentro de la legalidad) apunta el hecho de que el 20% de los hogares pobres presentaban irregularidades en la tenencia de la vivienda, pues eran propietarios sólo de la vivienda y no del terreno, o bien eran ocupantes de hecho, etc, porcentaje al que hay que unir otro 15% de hogares pobres, ocupantes de su vivienda por cesión o préstamo. Esta cuestión de la irregularidad en la tenencia de la vivienda va más allá del aspecto estrictamente legal o formal, puesto que trae aparejado un grado variable de inestabilidad en la ocupación, y además de ser un reflejo de la no disponibilidad de los recursos necesarios para acceder a una vivienda en situación regular, también influye de manera decisiva en la capacidad y, por supuesto, utilidad percibida por los moradores, de hacer reformas que mejoren las condiciones materiales de su casa.

De cualquier forma, las necesidades de dotación de infraestructura básica de las viviendas que, en teoría, podían ser obstaculizadas por las situaciones de tenencia irregular son relativamente escasas entre los hogares pobres de la región; en parte porque como acabamos de indicar la abrumadora mayoría reside en barrios con trazado urbano, en parte porque la información sobre la

disponibilidad de servicios básicos, con la única excepción del agua, se refiere a la manzana en la que se localiza la vivienda, y no a ésta individualmente. Esta precisión creemos que es relevante, puesto que, tal y como indica Clichevsky (2000, pág. 39), la ampliación de los servicios públicos no conlleva necesariamente que su accesibilidad para los pobres haya aumentado. Así, según la autora, la cañería de agua puede pasar por la puerta de la vivienda, pero no pueden pagar el servicio, la población en hábitat informal puede tener un colegio cerca, pero los niños deben trabajar desde muy pequeños y no pueden asistir, e indica, concretamente para el caso argentino, la aplicación de tarifas diferenciales para los pobres por parte de las empresas eléctricas, tras la mediación del Estado, para la resolución de los problemas generados por los enganches ilegales a la red eléctrica, suprimidos tras la privatización del servicio.

Volviendo a la encuesta, lo cierto es que la localización de la mayoría de los hogares pobres en barrios con trazado urbano conduce a que la mayor parte de los mismos formen parte de manzanas en las que están disponibles servicios básicos tales como cloacas, luz eléctrica o especialmente agua corriente, lo cual aumenta la posibilidad de que los hogares individuales dispongan de ellos (cuadro III), y así sabemos que la disponibilidad de agua corriente en los hogares pobres es muy elevada, sólo el 2,9% de los mismos carecen de ella, eso sí,

frente a un testimonial 0,3% de hogares no pobres. De cualquier forma, la disponibilidad de ciertas infraestructuras básicas viene influida en la región no sólo por la capacidad adquisitiva de los hogares, sino también por la propia existencia de las mismas. En este sentido resulta esclarecedor el hecho de que el 29,8% de hogares no pobres estén situados en manzanas en las que no se dispone de gas natural, o que el 24,5% lo esté en manzanas sin cloacas; estas carencias son indicativas del conjunto de problemas por el que las ciudades del Noroeste han venido atravesando en su proceso de expansión espacial (para el caso del Gran San Miguel de Tucumán puede consultarse a LULLO y GIOBELLINA, 1996); pero, incluso así, el acceso potencial de los hogares pobres a estas infraestructuras comparativamente poco extendidas es considerablemente menor que el de los hogares no pobres.

La ECV no provee de información acerca de las zonas de las ciudades en las que reside la población por debajo del umbral de pobreza. Sin embargo, sabemos que en tres de las seis capitales provinciales de la región (San Salvador de Jujuy, Salta y San Miguel de Tucumán) los barrios de los estratos pobres se encuentran claramente concentrados en la periferia del entramado urbano (los barrios marginales céntricos están virtualmente ausentes), mientras que los sectores de clase alta residen aún, en lo fundamental, en el centro, en el cual se concentra el grueso de la actividad comercial (MERTINS; 1996, pág. 494). En estos tres centros urbanos existe, por tanto, cierto grado de segregación residencial, lo cual probablemente sea extrapolable a otros centros urbanos de la región, y una importante concentración del comercio en el centro. Siendo esto así, no debe extrañar que la ECV indique de forma sistemática la existencia de un porcentaje superior de hogares pobres situados a distancias importantes de los lugares donde se prestan ciertos servicios básicos, como un teléfono público (en un contexto en el que la presencia de teléfono por red no llega a la cuarta parte de estos hogares, y al 5% los que disponen de celular), una escuela primaria o el transporte público; y tampoco el que el porcentaje de hogares pobres situados en las cercanías de un basural o de un área inundable sea superior al de los hogares no pobres en esa misma situación.

Esta diferente cercanía a algunos servicios básicos podría ser reflejo de la situación de segregación, no sólo económica, a la que la población pobre parece enfrentarse no sólo en Argentina o el Noroeste, sino también en el resto de América Latina. La ECV no permite abordar el estudio de las consecuencias de la segregación es-

pacial de los pobres, un tema que ha aflorado con cierta intensidad en los últimos años (KATZMAN, 2003 y 2001; ARRAIGADA y RODRÍGUEZ, 2003; RODRÍGUEZ, 2001), pero que presenta aspectos de indudable interés, entre ellos, la agudización en los problemas a los que se enfrentan los pobres como consecuencia de su localización mayoritariamente periférica en la ciudad. En este sentido, Katzman ha demostrado que en Montevideo existe una relación entre el barrio de residencia y el nivel de ingresos (cit. en ARRAIGADA y RODRÍGUEZ; 2003, pág. 55); y también el hecho de que la segregación espacial puede tener efectos a la hora de debilitar los activos sociales de los pobres urbanos, al restringir sus redes sociales a otras personas de igual condición. De cualquier forma, en relación con las ciudades del Noroeste quedaría en primer lugar por ver si se dan las condiciones para que estos procesos de restricción de los intercambios sociales de los pobres aparezcan con intensidad, puesto que, por ejemplo, la presencia de barrios cerrados en Tucumán, la capital de la región más avanzada desde el punto de vista de la evolución espacial, es prácticamente testimonial, y aún no se aprecian lugares ocio o consumo estrictamente diferenciados por clases sociales, entre otros rasgos posibles de la segregación.

Anteriormente hemos indicado cómo podía intuirse, de los datos acerca de la situación de tenencia de la vivienda, una dificultad comparativa por parte de los hogares pobres a la hora de acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, de ahí que el volumen de situaciones irregulares en relación con la tenencia fuesen en este grupo de hogares muy superiores al correspondiente a los hogares no pobres. En este sentido, debe señalarse que junto a la primera expresión de pobreza en el hábitat urbano, manifestada por la localización de los hogares en villas, asentamientos, etc, así como por la irregularidad en la tenencia, hay un segundo aspecto de la misma, que se extiende también al marco del hábitat formal, al hábitat cubierto por el sistema legal de tenencia; este segundo aspecto se hace patente cuando atendemos a las familias ampliadas, referidas en el epígrafe anterior. Como vimos, en la región del Noroeste la presencia de hogares diferentes a la familia nuclear no es exclusiva del grupo de hogares pobres, pero ciertamente su peso en este grupo está muy por encima del correspondiente a los hogares no pobres, tanto en la categoría de hogar de familia ampliada completa como monoparental.

Como consecuencia parcial de esta situación en la que varios hogares comparten una misma vivienda, los niveles de hacinamiento son más elevados entre los po-

bres, pues cuando la demanda de vivienda no puede ser satisfecha (en este caso por falta de capacidad adquisitiva) el número de habitantes por vivienda tiende a incrementarse. Junto al déficit cualitativo de una porción de las viviendas en las que residen hogares pobres que anteriormente mostramos, en el Noroeste existe un déficit cuantitativo de vivienda al alcance de este segmento de hogares. Y esto es importante, puesto que al igual que en el conjunto de América Latina, en Argentina la marcada desigualdad en la renta, y la crisis monetaria (con fuertes implicaciones sociales) por la que atraviesa el país ha dejado fuera del mercado de la vivienda a un volumen considerable de hogares, situación difícil de paliar por parte del Estado. En relación con esto último, merece la pena señalar que el volumen del gasto público social consolidado en vivienda y urbanismo ha experimentado un drástico descenso durante la década de los noventa, quedando reducido prácticamente a la mitad, pues si hacemos equivaler su monto en 1990 a 100, en 2000 su valor ascendía tan sólo a 53,5 (ACUÑA, KESSLER y REPETTO; 2002, pág. 15).

El hecho es que los niveles de hacinamiento de los hogares pobres del Noroeste son muy elevados, no ya sólo en relación con el conjunto de hogares no pobres, lo cual es de esperar, sino también en comparación con la situación correspondiente al total nacional. Definido el hacinamiento crítico como la situación en la que el cociente entre personas que habitan una vivienda y el número de habitaciones es ésta (excluidos baños y cocina) es superior a tres, el 30,4% de los hogares pobres de la región encaja en esta situación, cantidad a la que hay que sumar otro 25% de hogares pobres en condiciones de hacinamiento moderado (en este caso el cociente es mayor que 2 y menor que 3). Como indicamos, estas cifras no resisten comparación, no ya con la situación de los hogares no pobres (3,3% con hacinamiento crítico y 12,1% con hacinamiento moderado), sino con la correspondiente a los hogares pobres del conjunto del país (19,4% y 25,3%, respectivamente).

De cualquier forma, es evidente que no sólo la presencia de varios hogares en una misma vivienda subyace al hacinamiento, puesto que hay otras causas, relativas tanto a la dinámica demográfica de los hogares (las tasas de natalidad) como a las características de la propia vivienda: fundamentalmente su tamaño, medido no sólo en número de dormitorios, sino también en metros cuadrados (cuya disponibilidad posibilitaría la ampliación del número de cuartos), pero el hecho es que este fenómeno afecta con mucha mayor intensidad a la población con ingresos insuficientes.

V

POBLACIÓN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Tal y como indica Arraigada (2000, pág. 15), las relaciones de la pobreza con las desventajas en materia de instrucción funcionan en un doble sentido. Por un lado, unos bajos niveles de instrucción generan pobreza, mientras que, por otro, la situación de pobreza constituye un factor limitante a la hora de adquirir capital educativo, con lo que la pobreza se reproduce o transmite de una generación a otra.

Para el conjunto de América Latina, CEPAL (1994) indica que a comienzos de la década de los noventa si las personas en edad activa querían lograr una probabilidad importante de eximir a su hogar de los riesgos de la pobreza necesitarían al menos 10 años de educación formal, aumentando aún más las probabilidades si en esos 10 años se obtenía el título de secundaria. Para el caso argentino, Riquelme (2001) indica que ya durante los ochenta se registró en el país un proceso de «fuga hacia adelante», esto es, el haber completado el nivel secundario se convierte en requisito para acceder a un puesto de trabajo estable; en esta misma dirección apunta la afirmación de Altimir y Beccaria (1999, pág. 37), en un estudio sobre el mercado de trabajo en Argentina durante los noventa, de que durante esa década los trabajadores con menor nivel de instrucción (esto es, aquéllos que contaban con secundaria incompleta o menos), experimentaban un elevado grado de precariedad laboral. Y, además, cabe la posibilidad de que durante la década de los noventa en Argentina hubiese tenido lugar un proceso de «devaluación educativa», esto es, una creciente preferencia (y posibilidad) por parte de los empleadores por contratar trabajadores con unos niveles de instrucción superiores a los de aquellos que tradicionalmente cubrían el puesto (*Ibíd.*, pág. 16).

En consonancia con ello, no debe extrañar que la población pobre del Noroeste presente unos niveles de instrucción formal inferiores a los correspondientes a la población no pobre (cuadro IV). Alrededor de la mitad de la población en situación de pobreza de entre 6 y 29 años que abandonó el sistema educativo alcanzó como nivel máximo durante su período formativo el de primaria incompleta (más del doble de la proporción correspondiente a los no pobres), mientras que menos del 5% inició cursos de formación superior una vez terminada la secundaria. Dadas las crecientes exigencias del mercado de trabajo a las que arriba hicimos referencia, podemos considerar que los bajos niveles de instruc-

CUADRO IV. Población de 6 a 29 años, máximo nivel de instrucción alcanzado (porcentajes)

Nivel máximo alcanzado	Pobres	No pobres
Primario completo	48,25	21,91
Secundario incompleto	32,50	28,45
Secundario completo	14,51	26,78
Terciario incompleto y más	4,74*	22,85

* Coeficiente de variación superior al 15% y hasta del 20%
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2001.

ción de este segmento de la población pobre constituyen un déficit severo.

Además, los bajos niveles de instrucción afectan negativamente no sólo a la capacidad para insertarse en el mercado laboral, o de mantenerse en tiempos de crisis, y al monto de ingresos que potencialmente se pueden obtener; sino que también tiene consecuencias importantes sobre aspectos más sociológicos. El SIEMPRO (2001, pág. 32) recuerda que hay constancia de que un aumento en el tiempo que los jóvenes permanecen en el sistema educativo produce una reducción sensible de la incidencia de problemas tales como por ejemplo la maternidad adolescente, frecuentes en la región del Noroeste (sobre la relación entre nivel de instrucción y maternidad adolescente observada a partir de los datos de la ronda censal de 2000 en 9 países latinoamericanos puede consultarse PAZ *et al.*; 2004, págs. 25-30).

Sin embargo, la edad a la que los jóvenes pobres y no pobres abandonan el sistema educativo es muy similar si atendemos al nivel máximo de instrucción que alcanzaron (cuadro V): la mayor diferencia, tan sólo de un año a favor de los no pobres, se sitúa en los niveles terciario incompleto o superior. Sin embargo, esta aparente igualdad debe ser matizada; acabamos de ver cómo el volumen de jóvenes no pobres que alcanzó mayores credenciales educativas es superior al de los pobres, lo cual lleva a que si bien es cierto que la edad a la que abandonaron el sistema educativo al acabar la primaria es la misma para los jóvenes pobres y no pobres (13,1 años), el volumen de los primeros (126.079) es enormemente superior con respecto a los segundos (39.692); en contraste, la situación correspondiente al secundario completo, donde las edades de abandono del sistema educativo son aún muy similares, el volumen de jóvenes pobres es menor en un 22% con respecto al de los no pobres. La igualdad bajo este criterio corresponde, por tanto, a los jóvenes de manera individual, pero no a los dos

grupos, pobres y no pobres. Las causas del abandono masivo del sistema educativo por parte de los jóvenes pobres no pueden ser exploradas a través de la información que proporciona la encuesta. Pero sean cuales sean éstas, el hecho es que si bien a corto plazo este abandono podría tener una vertiente positiva, al redundar en un aumento de los ingresos del hogar al que estos jóvenes pertenecen si llegasen a obtener un empleo, a medio y largo plazo las escasas credenciales educativas obtenidas son un obstáculo importante para lograr una inserción en condiciones aceptables en el mercado de trabajo. Téngase en cuenta que, tal y como venimos indicando, los requerimientos educativos para la obtención de un empleo bien remunerado tienden a elevarse, de ahí que las posibilidades de salir de la pobreza a través del empleo que tienen estos jóvenes se vean disminuidas.

Tan importante como el nivel de instrucción alcanzado una vez que se abandona el sistema educativo formal, es la permanencia en el mismo de la población en edad escolar, lo nos indica la continuidad intergeneracional de una de las condiciones determinantes de la pobreza. Si bien la asistencia al centro escolar es obligatoria durante el nivel primario (entre los 6 y 12 años de edad), esta exigencia sólo se ve estrictamente satisfecha en el caso de los niños no pobres, pues la totalidad de ellos asistiría a un centro escolar, mientras que hay un 1,7% de niños pobres que no van a la escuela. Un porcentaje escaso, ciertamente, pero inexistente en el otro grupo de niños. Conforme ascendemos en la escala educativa, las tasas de cobertura³ de la población pobre van descendiendo progresivamente, y aumentando las diferencias con respecto a los no pobres. La tasa de cobertura en la educación secundaria de los pobres es de tan sólo el 79,6%, frente al 95,4% de los no pobres; y cuando la referencia es a la educación superior, las diferencias se disparan, puesto que frente a un 58,9% de jóvenes no pobres de entre 18 y 24 años que estudian estudios superiores, tan sólo el 26,8% de la población pobre del mismo grupo de edad lo hace. La desigual capacidad para obtener activos educativos, con todo lo que éstos traen consigo, por parte de la población pobre a la que arriba hicimos referencia queda claramente plasmada en estos

³ El glosario de la Ecv define la tasa de cobertura de la siguiente manera: «porcentaje que representa la población total que asiste a un nivel educativo sobre la población resultante de la suma de la población en edad potencial para asistir a ese nivel, más la población en extra-edades que asiste al mismo menos la población en edad de asistir a este nivel pero que asiste a otro». Las edades potenciales por nivel son las siguientes: primaria, de 6 a 12 años, secundaria, de 13 a 17 años, y terciaria de 18 a 25 años.

CUADRO V. Población de 6 a 29 años. Algunas características educativas

Máximo nivel educativo alcanzado	Edad promedio al dejar el sistema educativo (años)			Volumen de población según el máximo nivel de instrucción alcanzado		
	Total	Pobre	No pobre	Total ⁽¹⁾	Pobre	No pobre
Total	16,4	15,4	17,7	445.280	263.000	182.280
Primario completo	13,1	13,1	13,1	165.771	126.079	39.692
Secundario incompleto	16,7	16,6	16,8	136.455	84.907	51.548
Secundario completo	18,5	18,6	18,4	86.442	37.920	48.522
Terciario incompleto y más	22,1	21,3*	22,3	53.782	12.386	41.396

⁽¹⁾ No incluye NS/NR.

* Coeficiente de variación superior al 15% y hasta del 20%.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2001.

niveles de escolarización, menores para los pobres cuanto mayor sea el nivel de instrucción.

Pero además esta desigualdad se ve incrementada si tomamos en consideración el tipo de establecimiento (público o privado) al que asisten los escolares; tal y como indica Pizarro (2001, pág. 15), a fines de los noventa no cualquier tipo de educación garantiza las mismas garantías de fortalecimiento del capital humano y, por tanto, de oportunidades de progreso en la vida. En toda América Latina una característica propia de la educación en los noventa es la segmentación según niveles de renta de los estudiantes. Los niños y jóvenes de alto nivel de renta acuden a establecimientos privados, que suelen ofrecer una mejor infraestructura y calidad formativa, mientras que los provenientes de familias de bajos ingresos pueden acceder sólo a establecimientos públicos, en los que existe un deterioro académico. Dadas las restringidas posibilidades de acceso al mercado de trabajo, las diferencias de calidad en la educación pública y privada son mucho más relevantes hoy día que el número de años de estudio. En este sentido, la UNESCO indica que el promedio de los estudiantes apenas alcanza el 50% de lo esperado en el currículo oficial, mientras que los estudiantes matriculados en colegios privados fácilmente logran el 100%. En el caso del Noroeste la situación de la educación pública es peor que la correspondiente a la privada, con personal docente escasamente pagado, suspensión intermitente de los períodos lectivos, etc, en un contexto en el que tanto la educación primaria como la secundaria están traspasadas a unas provincias cuya situación económica no pasa por sus mejores momentos, con unos gastos medios por alumno en descenso y enfrentadas en desventaja a un probable aumento de las diferencias de calidad educati-

va, a favor de las provincias con niveles de renta más elevados (GROPELLO; 1999, pág. 166).

Los datos que arroja la encuesta son, una vez más, esclarecedores a este respecto: el porcentaje de alumnos no pobres que asisten al sector privado ronda el 28% en la primaria y en la secundaria, frente al 8,94% en la secundaria y un exiguo 5,65% en la primaria en el caso de los pobres. Tan sólo en el ciclo superior las diferencias son menos marcadas, aunque aún así el porcentaje de alumnos no pobres que acuden a estudiar a un centro privado duplica el correspondiente a los alumnos pobres (18,18% y 8,49%, respectivamente). En sí, esta realidad no es sorprendente, puesto que parece lógico que los pobres tengan mayores dificultades para pagar un colegio privado, debiendo por tanto enviar a sus hijos a la escuela pública. Pero su constatación efectiva en el Noroeste resulta importante, puesto que, como indicábamos al comienzo de este epígrafe, la situación de pobreza constituye un factor limitante a la hora de adquirir un capital educativo, referido en este caso a la calidad del mismo, con lo que aumenta la probabilidad de que la pobreza se reproduzca o transmita de una generación a otra, y ello en un contexto de situación social rezagada con respecto al conjunto de la República.

Las diferentes credenciales educativas de la población pobre y no pobres tienen, además, otra derivación, no necesariamente evidente, pero que efectivamente se constata en el Noroeste, y que se refiere a la continuidad de la formación a través de la educación no formal (ENF). Se ha indicado que los que mayor nivel educativo tienen también demandan o consumen más educación, siendo esta afirmación válida para la región (cuadro VI). Así, si tan sólo el 4% de la población mayor de 15 años

CUADRO VI. Población de 15 años y más. Asistencia a Educación No Formal (porcentajes)

Condición de asistencia a cursos de ENF en los últimos 12 meses	Total	Máximo nivel educativo alcanzado				
		Primario completo	Secundario		Terciario	
			incompleto	completo	incompleto	completo
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Asiste o asistió	14,5	4,0	12,6	18,2	26,9	38,7
No asiste, ni asistió	85,5	96,0	87,4	81,8	73,1	61,3

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2001.

con el título de primaria como máxima credencial de educación formal recibió algún tipo de ENF, el 38,7% de los que acabaron la educación superior sí la recibieron. Esta situación se mantiene, al menos, desde 1993 (RIQUELME; 2001, pág. 39)⁴. Y lo mismo ocurre si diferenciamos a la población en no pobres y pobres; el 17,7% de los mayores de 15 años no pobres recibieron algún tipo de educación no formal, frente a un exiguo 9,3% de los pobres.

VI NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y MERCADO DE TRABAJO

Si, como al comienzo del estudio indicábamos, la Encuesta de Condiciones de Vida aportaba una información más amplia que la Encuesta Permanente de Hogares sobre determinados aspectos de la población pobre y no pobre según el nivel de renta, también es cierto que no constituye el mejor instrumento para el conocimiento del mercado de trabajo de la región, siendo en este caso la Encuesta Permanente de Hogares el medio más adecuado. El problema fundamental que presenta la información de la ECV es la baja representatividad estadística cuando se intenta descomponer la información en múltiples categorías, y que se magnifica al dividir a la población entre pobres y no pobres; por ello, el análisis que se puede realizar es muy somero, resultando especialmente poco representativa la información discriminada entre

pobres y no pobres, debido al tamaño excesivamente pequeño de las poblaciones resultantes.

Pese a todo ello, y enlazando con lo tratado en el epígrafe anterior, puede indicarse sin lugar a dudas que las tasas de ocupación (calculadas sobre la población económicamente activa según nivel de instrucción) son superiores para aquellos activos que continuaron asistiendo a un establecimiento educativo una vez que acabaron la educación secundaria, hubieran terminado los estudios superiores o no. Además, las tasas de ocupación son mayores entre aquellos activos que terminaron la primaria o la secundaria, frente a aquellos otros que tan sólo la iniciaron, sin terminarla. Sin embargo, resulta llamativo el hecho de que los activos con la secundaria completa o incompleta exhiban unas tasas de ocupación inferiores a los activos con la primaria completa o incompleta; el efecto de los planes de empleo implementados por el gobierno nacional podría tener alguna influencia en esta cuestión.

En cuanto a la estructura ocupacional de la población activa del Noroeste, puede indicarse que si bien el grupo de obreros o empleados de empresas privadas constituye el más importante (38,49%), resulta significativo el importante peso del sector público, que absorbe al 23% de los ocupados, frente al 16,94% del total nacional. La empresa privada tiene en el Noroeste una capacidad de absorción de mano de obra considerablemente menor que en el conjunto de Argentina, puesto que a nivel nacional el 45,91% de los ocupados son empleados u obreros de empresas privadas. El escaso tamaño económico de las provincias del Noroeste, mencionado en la presentación regional, es probablemente parte de la causa de este hecho. Por otro lado, resulta interesante indicar que el porcentaje de trabajadores por cuenta propia en el Noroeste es ligeramente inferior al del total nacional (23,9% y 24,86% respectivamente), al

⁴ Con información del módulo especial de educación que se introdujo en la onda de mayo de 1998 en la EPH, la autora muestra cómo en el período 1993-1998 tan sólo el 12,1% de los menores de 30 años del Noroeste con la primaria incompleta recibió ENF, frente al 56,7% de los que iniciaron el ciclo formativo superior. Para la población de 30 años o más, los porcentajes eran del 8,1% y el 53,8%, respectivamente.

CUADRO VII. Población ocupada de 15 a 64. Categoría ocupacional según nivel de instrucción

Categoría profesional de los ocupados	Total	Máximo nivel educativo alcanzado				NS/NR
		Sin instrucción y primario incompleto	Primario completo y secundario incompleto	Secundario completo y terciario incompleto	Terciario completo	
Total	1.066.182	125.772	477.209	300.730	158.601	3.870**
Empleado u obrero de una empresa privada	410.421	49.277	200.689	121.925	37.007	1.523**
Empleado u obrero de una institución pública	245.255	14.287*	62.657	81.053	86.140	1.118**
Empleado del servicio doméstico	103.135	20.237**	69.646	11.758*	1.494**	–
Patrón o empleador	51.154	2.849**	16.477*	19.050*	12.778**	–
Cuenta propia y trabajador sin salario	255.124	38.747	127.327	66.639	21.182	1.229**
NS/NR	1.093	375**	413**	305**	–	–

* Coeficiente de variación superior al 15% y hasta del 20%.

** Coeficiente de variación superior al 20%.

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares.

tiempo que el otro sector englobado en el sector informal, el servicio doméstico, es dos puntos superior en el Noroeste que en conjunto de la República.

Centrándonos ya en las relaciones entre nivel de instrucción y mercado de trabajo, debe apuntarse que en lo concerniente a las categorías ocupacionales las cifras no se separan demasiado de lo que cabría esperar (cuadro VII), pues conforme aumenta el nivel de instrucción formal disminuye considerablemente la presencia entre los ocupados de los trabajadores por cuenta propia y no asalariados, lo cual vale también para el servicio doméstico, al tiempo que la categoría de patrón o empleador presenta un comportamiento contrario al precedente. Por consecuencia, el conjunto de ocupados que no alcanzó a terminar el nivel secundario compone el grueso de lo que se ha venido a denominar sector informal de supervivencia (ARRAIGADA; 2000, pág. 13), y más concretamente, el 87% del servicio doméstico y el 65% de los trabajadores por cuenta propia⁵ y sin salario. Desgraciadamente, no puede profundizarse más en esta cues-

tión, debido a las restricciones que la representatividad estadística impone a un conjunto muestral muy fraccionado entre las diferentes combinaciones de niveles de instrucción y categorías profesionales.

Sin embargo, sí puede afirmarse sin lugar a dudas que la incidencia del empleo no registrado es importante entre los asalariados del Noroeste, elevándose al 37,07% del total, un porcentaje superior en un 4% al del conjunto nacional. Esta incidencia del empleo no registrado afecta especialmente a los trabajadores con menores niveles de instrucción; existe una clara relación negativa entre nivel de instrucción y cobertura de la seguridad social, que llega al extremo de que hay más asalariados que no habían completado la primaria sin este tipo de cobertura social que con ella (cuadro VIII). Un puesto de trabajo no registrado trae consigo un importante grado de precariedad, con las consiguientes implicaciones para el bienestar del hogar en su conjunto. Es cierto que la situación de precariedad es algo negativo para cualquier trabajador, pero también lo es el que la precariedad laboral para los trabajadores con menos credenciales educativas (especialmente si son cabezas de familia) es más preocupante que, por ejemplo, la de los profesionales, quienes aun sufriendo una escasa estabilidad laboral tienen mayores oportunidades de obtener un ingreso promedio más elevado.

Pero el trabajo no es sólo fuente de ingresos monetarios, sino que además puede ser acceso a prestaciones

⁵ Ciertamente no deben equipararse los profesionales por cuenta propia (por lo general con elevados niveles de instrucción, y dedicados a profesiones liberales) con los no profesionales, siendo estos últimos los que efectivamente integran el sector informal. El número de los primeros en el Noroeste es extremadamente escaso, menos de 15.000 (la cifra exacta, que debe tomarse como indicativa, es de 12.398) frente a 208.110 de no profesionales, esto es, un 5,61%, reducido número que impide su estudio individualizado.

CUADRO VIII. Cobertura de la Seguridad Social de los ocupados asalariados de 15 a 64 años

Máximo nivel educativo alcanzado	Total	Cobertura de la seguridad social		
		Registrados	No registrados	NS/NR
Total de asalariados	655.676	408.437	243.065	4.174*
Hasta primaria completa	191.314	90.805	99.725	784*
Secundario incompleto	135.596	67.698	67.226	672*
Secundario completo	112.373	77.192	34.038	1.143*
Terciario incompleto	90.605	59.651	30.232	722*
Terciario completo	123.147	112.017	10.277	853*
NS/NR	2.641*	1.074*	1.567*	—

* Coeficiente de variación superior al 20%.

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares.

sociales de salud, jubilación, etc. Así, el carácter de no registrado del trabajo no sólo lo convierte en un tipo de empleo de alta precariedad mientras se tiene, sino que también impide de raíz la obtención del seguro de desempleo; téngase en cuenta que para su disfrute es necesario, entre otros requisitos, el haber realizado aportes a la seguridad social durante al menos 12 meses de los 36 anteriores al despido, esto es, no puede optarse a él con un empleo «en negro». Y pese a lo escaso de la cuantía del seguro, no cabe duda de que el ingreso que supone podría considerarse una contribución no desdeñable a las disponibilidades monetarias de los hogares más pobres.

Un último aspecto al que queremos hacer referencia es a los hogares con jefatura femenina y menores a su cargo. Que la familia esté a cargo de una mujer no necesariamente supone problemas de subsistencia, y en el Noroeste la proporción de hogares pobres con cabeza de familia varón o mujer es prácticamente la misma, de en torno al 40%. Es más, el porcentaje de jefas de hogar ocupadas sobre el total de jefas activas es relativamente elevado, un 87,11%, aunque inferior en 3,75% al de los varones. Pero cuando existen menores a cargo, la situación cambia drásticamente. El porcentaje de familias monoparentales con jefatura femenina que están en situación de pobreza es del 46,56%, frente al 32,66% de hogares pobres con jefe varón. En su momento comprobamos cómo es cierto que la pobreza azota en igual medida a los varones que a las mujeres, pero cuando éstas están solas a cargo del hogar, entonces sufren más una situación de ingresos insuficientes. ¿Cómo conjugar este hecho con los elevados porcentajes de ocupación a los que acabamos de hacer referencia? La responsable del desarrollo conceptual de la EPH a finales

de los noventa, Cinthia Pok (cit. en CARBONETTO; 1997, pág. 286), da algunas pistas al respecto. Según ella, la tasa de desempleo en contextos de naturaleza recesiva ve transformarse su sentido: el desempleo abierto se convierte en un «lujo», desde el momento en que en períodos críticos los desocupados difícilmente pueden mantener un período prolongado de búsqueda activa de empleo sin percibir ingreso alguno. Esta afirmación la realiza para el conjunto de la población económicamente activa, pero creemos que es especialmente válida para las jefas de hogar de las familias monoparentales del Noroeste, una región que está atravesando una crisis económica y social. Pero, precisamente por la necesidad de ingresos que acucia a estos hogares, no puede garantizarse que el empleo del que dispone una fracción de las jefas de hogar con menores a cargo les garantice unos ingresos mínimamente suficientes, lo cual probablemente influye en la mayor incidencia de la pobreza en este tipo de hogar.

VII REFLEXIONES FINALES

A través de la explotación de la Encuesta de Condiciones de Vida hemos podido comprobar, entre otras cuestiones, la importante incidencia de la pobreza en la región del Noroeste argentino, hasta el punto de ser la región proporcionalmente más afectada del país en conjunto; también se ha visto cómo, si bien la pobreza afecta a ambos sexos por igual, se ceba con especial virulencia en la población de menor edad, pues casi dos tercios partes de los niños son pobres. Se ha comprobado que la mayor parte de la población pobre no reside en

villas miseria, sino en barrios con trazado urbano (el marcado empobrecimiento de la sociedad argentina en general probablemente tiene mucho que ver en ello), aunque eso no significa que sus condiciones de alojamiento sean óptimas, dado que sufren unos niveles de hacinamiento superiores a los de la población no pobre, y dado que sus posibilidades de acceso a infraestructuras y servicios básicos son menores. Además, se ha visto que el porcentaje de los hogares con una tenencia irregular de la vivienda es comparativamente más elevado entre los pobres.

Sin embargo, creemos que es especialmente relevante lo relativo al nivel de instrucción de la población pobre, puesto que la educación es una de las llaves más importantes para acceder en condiciones dignas a un mercado laboral cada vez más segmentado y, por tanto, para abandonar la condición de pobre. Bajo este prisma, la situación en la que se encuentra la población pobre del Noroeste argentino es muy preocupante: no sólo sus logros educativos formales son, proporcionalmente, menores a los de la población no pobre, sino que han sido adquiridos mayoritariamente en un sistema educativo público que presenta carencias, al tiempo que la capacitación que este segmento de población ha obtenido fuera del sistema educativo formal es muy escasa. La importancia de estos hechos se muestra claramente cuando los relacionamos con el mercado de trabajo. La incidencia del desempleo es mayor entre los que menores niveles de instrucción tienen, los ocupados menos instruidos integran el grueso del sector informal de supervivencia, y sólo fracciones meramente testimoniales son patrones o empleadores. La encuesta no aporta información que nos permita acercarnos directamente a las diferencias salariales entre las categorías de ocupados (que, de cualquier forma, pueden intuirse), pero sí nos informa sobre

los beneficios no monetarios de los modos de inserción en el mercado laboral; así, la mayor parte de la población con menores niveles de instrucción no tiene cobertura de la seguridad social, con lo que carece de acceso a los beneficios derivados de ésta.

Pero, tan preocupante como la situación actual de la población por debajo del umbral de pobreza, resultan las escasas posibilidades de salir de ella a través del empleo con las que cuentan en nuestra opinión los pobres, y ello por dos razones. De un lado, resulta difícil vislumbrar una mejora del empleo por parte de aquellos que lo tienen, dado que las credenciales educativas de que disponen no les permitirían integrarse en los nichos más productivos, máxime en un contexto de reducción del empleo menos cualificado que afecta al conjunto de Argentina; por otro lado, tampoco son más halagüeñas las perspectivas para los desocupados, porque ni siquiera el ya sobredimensionado sector público podrá presumiblemente absorberlos. La necesidad de implementar planes de empleo para tratar de paliar la angustiada falta de ingresos de los hogares más pobres es una muestra reciente de la importancia de este problema. Para los jóvenes que están actualmente en situación de pobreza, las posibilidades de salir de ella son, al menos, tan escasas como las de sus predecesores, pues aunque hayan alcanzado credenciales educativas superiores a las de sus padres, resultarán insuficientes ante la mencionada evolución actual del mercado de trabajo; el aumento de las exigencias ha sido superior al incremento de su capacitación. Todos estos elementos, unidos a unos perfiles productivos provinciales no exentos de limitaciones, no permitirían augurar una suavización del problema de la pobreza en la región, antes al contrario, tal y como la evolución de las cifras de los afectados por este fenómeno en los últimos dos años nos ha mostrado.

B I B L I O G R A F Í A

ACUÑA, C., KESSLER, G. y REPETTO, F. (2001): *Evolución de la política social argentina en la década de los noventa: cambios en su lógica, intencionalidad y el proceso de hacer la política social*. Proyecto Self-sustaining community development in comparative perspective. Buenos Aires, 60 págs.

ALTIMIR, O. y BECCARIA, L. (1999): *El mercado de trabajo bajo el nuevo régimen económico en Argentina*. Serie Reformas Económicas n° 28. CEPAL. Santiago de Chile, 79 págs.

ARRAIGADA LUCO, C. (2000): *Pobreza en América Latina. Nuevos escenarios y desafíos de política para el hábitat urbano*. Serie Medio Ambiente y Desarrollo, n° 27. CEPAL, Santiago de Chile, 70 págs.

ARRAIGADA LUCO, C. y RODRÍGUEZ VIGNOLI, J. (2003): *Segregación residencial en áreas metropolitanas de América Latina: magnitud, características, evolución e implicaciones de*

política. Serie Población y Desarrollo, n° 47. CELADE, Santiago de Chile, 73 págs.

BOLSI, A. (dir.) (1997): *Problemas poblacionales del Noroeste argentino (contribuciones para su inventario)*. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 280 págs.

CARBONETTO, D. (1997): «El sector informal y la exclusión social», en VILLANUEVA (coord.): *Empleo y globalización. La nueva cuestión social en la Argentina*. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, págs. 258-300.

CEPAL (1994): *Panorama social de América Latina*. CEPAL, Santiago de Chile, 206 págs.

CLICHEVSKY, N. (2000): *Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación*. Serie Medio Ambiente y Desarrollo, n° 28. CEPAL, Santiago de Chile. 61 págs.

GATTO, F. y CETRÁNGOLO, O. (2003): *Dinámica productiva provincial a fines de los años noventa*. Serie Estudios y Perspectivas, n° 14. CEPAL, Santiago de Chile, 76 págs.

GROPELLO, E. di (1999): «Los modelos de descentralización educativa en América Latina», *Revista de la CEPAL*, n° 68, págs. 154-170.

KATZMAN, R. (2003): *La dimensión espacial en las políticas de superación de la pobreza urbana*. Serie Medio Ambiente y Desarrollo, n° 59. CEPAL, Santiago de Chile, 48 págs.

KATZMAN, R. (2001): *El aislamiento social de los pobres urbanos: reflexiones sobre su naturaleza, determinantes y consecuencias*. Serie Documentos de trabajo, n° 1. SIEMPRO, Buenos Aires, 27 págs.

LULLO, R. di y GIOBELLINA, B. (1996): *La otra ciudad. Tucumán hacia el 2000*. Programa Arraigo/Facultad de Arquitect-

tura y Urbanismo-Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 206 págs.

MERTINS, G. (1996): «La diferenciación socio-espacial y funcional de ciudades intermedias latinoamericanas: ejemplos del noroeste argentino», *Actas del I Congreso de Investigación Social*. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, págs. 492-502.

PAZ, J. et al. (2004): *América Latina y el Caribe: dinámica demográfica y políticas para aliviar la pobreza*. Serie Población y Desarrollo, n° 53. CEPAL, Santiago de Chile, 78 págs.

PIZARRO, R. (2001): *La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina*. Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos, n° 6. CEPAL, Santiago de Chile, 69 págs.

RIQUELME, G. (2001): *La educación formal y no formal de los trabajadores: diferenciales para el área metropolitana, regiones y por ingresos*. Programa MECOVI-Argentina, Buenos Aires, 121 págs.

RODRÍGUEZ VIGNOLI, J. (2001): *Segregación residencial socioeconómica: ¿qué es?, ¿cómo se mide?, ¿qué está pasando?, ¿importa?* Serie Población y Desarrollo n° 16. CEPAL, Santiago de Chile, 77 págs.

SIEMPRO (2002): *Informe de la situación social de la Provincia de Tucumán. Octubre 1998-Octubre 2002*. Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Buenos Aires, 23 págs.

SIEMPRO (2001): *Diagnóstico social de la provincia de Salta*. Serie Informes de Situación Social, n° 13. SIEMPRO, Buenos Aires, 84 págs.